

**0065/2021**

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en relación con el artículo 57.1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, cúmpleme informarle lo siguiente:

1) El apartado Diecinueve del artículo único del Anteproyecto de Ley Orgánica (APLO) modifica ligeramente el art. 74.1 de la LOPJ. En concreto, en su apartado k) precisa la identificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando antes dicho artículo se refería únicamente a la “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales”. Dado que el vigente apartado f) del art. 66 LOPJ, al referirse a las competencias de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, tiene la misma redacción que el actual art. 74.1.k) LOPJ, sería conveniente que la redacción del art. 66.1.f) se viese igualmente modificado de la misma manera. Lo mismo cabe decir del art. 58, apartado Tercero LOPJ, respecto de la competencia del Tribunal Supremo cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial.

2) La nueva redacción de los artículos 74.5 y 95.e) LOPJ trasladan a la nueva regulación que sustituye a los Juzgados Centrales y Juzgados de lo contencioso-administrativo, estableciendo las correspondientes Secciones de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Central de Instancia y en los Tribunales de Instancia, las competencias ya previamente previstas en los arts. 74 y 90 de la LOPJ. La redacción es similar a la existente, por lo que no se añade nada que ya no estuviese en la redacción anterior.

3) El apartado Setenta y siete del APLO modifica el art. 351 letra a) LOPJ, determinando en qué situaciones los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales. Pues bien, el órgano directivo “Director de la Agencia Española de Protección de Datos” a que hace referencia el citado art. 351.a) LOPJ ha sido suprimido (Disposición Adicional única del Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos). En su lugar, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales ha creado a la Presidencia y al Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (art. 48). La nueva redacción del art. 351, letra a) LOPJ deberá tener en cuenta esta circunstancia.

Desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales no se advierte, en principio, ningún comentario más que realizar. El Anteproyecto sometido a informe regula cuestiones orgánicas y organizativas. En los tribunales, los tratamientos de datos personales tienen lugar principalmente en los distintos procesos que se entablan ante jueces y magistrados, y estos procesos se regulan en las leyes procesales de cada orden jurisdiccional por lo que es lógico que la regulación de este Anteproyecto no incluya cuestiones esenciales relativas a estos.

No hay que dejar de señalar, sin embargo, que la normativa de protección de datos es aplicable a la actividad jurisdiccional y no jurisdiccional en los términos establecidos en la LOPJ, art. 236 ter y concordantes, los cuales no son objeto de modificación alguna. En concreto, el art. 236 nonies, apartado 1, LOPJ establece, en la redacción dada por la disposición final 3.12 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, que las competencias que corresponden a la autoridad de protección de datos personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas respecto del tratamiento de los mismos realizado por Juzgados y Tribunales de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 octies, por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial. El apartado 2 de dicho art. 236 nonies establece a su vez que los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales estarán sometidos a la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos.